

EL SILENCIO BAJO LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN LA ARGENTINA

Mercedes María Barros¹

Resumen: Este trabajo explora el tema del silencio bajo la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). El silencio se propagó rápidamente en la sociedad argentina durante los primeros años del así llamado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) y fue crucial para el sostenimiento del régimen de facto. Este silencio, como veremos fue reasegurado no solo por las acciones del gobierno, sino por la identificación de las principales fuerzas políticas y sociales con los objetivos del Proceso. Sin embargo, este silencio reinante y el resultante fracaso de los discursos disponibles para articular los efectos de la represión resultaron en una suspensión temporal de sentido dentro de la realidad discursiva del régimen. Dicha falta se convertirá en la instancia que finalmente pondría en jaque el funcionamiento del PRN y suscitaría la constitución de un nuevo movimiento y lenguaje de derechos humanos en el país.

Palabras claves: represión, miedo, silencio, ausencia y resistencia.

El silencio bajo la última Dictadura Militar en la Argentina

Abstract: This paper explores the issue of silence under the last military dictatorship in Argentina (1976-1983). Silence spread rapidly in Argentine society during the first years of the so called National Reorganization Process (PRN) and it became crucial for the maintenance of the illegal regime. This silence was actually assured not only by the action of the military government, but also by the clear identification of the political and social forces with the aims and values of the Proceso. However, this prevailing silence and the resulting failure of the existing discourses to articulate the effects of the dirty war resulted in a temporal suspension of meaning within the reality of the PRN. Silence became then the instance that would finally put into question the apparently smooth functioning of the PRN and would force the emergence and constitution of a new social movement and a new language of human rights in the country.

Key-words: repression, fear, silence, absence and resistance.

¹ PhD en Ideology and Discourse Analysis - Departamento de Ciencia Política, Universidad de Essex. Profesor - Doctorado en Ciencia Política - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

“Es un tiempo para el silencio”.

General Jorge Rafael Videla, Clarín, 7-03-1977.

1. Introducción

Este artículo es parte de un proyecto de investigación más abarcador en el cual analicé la emergencia y constitución del movimiento de derechos humanos y su discurso en Argentina bajo la última dictadura militar (BARROS, 2008). Allí, la movilización social sin precedentes alrededor de los derechos humanos que tuvo lugar en Argentina de ese entonces lejos de entenderse como una reacción natural y necesaria a la inusitada represión lanzada por el régimen de facto, fue concebida como el resultado de un proceso de articulación política contingente y como una respuesta que pudo haber fracasado en su constitución y posterior desarrollo. El objetivo de dicha investigación fue justamente rastrear las condiciones que efectivamente permitieron este proceso articulador y en definitiva hicieron al movimiento posible. Parte entonces de dicha tarea fue examinar los efectos iniciales del discurso militar sobre la sociedad Argentina. El presente artículo explora justamente uno de estos efectos: el silencio. Como se mostrará en un primer momento, el silencio se propagó rápidamente en la sociedad argentina durante los primeros años del Proceso y fue crucial para el sostenimiento del régimen de facto y sus planes re-fundacionales. Si bien detrás de aquel, como ser verá, se condensaron diferentes reacciones y actitudes que no implicaron una adherencia total al discurso del Proceso, ni tampoco una completa identificación con las posiciones de sujeto que éste habilitaba, si le permitió al gobierno militar en sus inicios controlar y prevenir la expresión y articulación de construcciones alternativas de la realidad. Veremos luego que este silencio fue reasegurado no solo por las acciones del gobierno, sino también por la fuerte identificación de las principales fuerzas políticas y sociales con los objetivos del Proceso. Sin embargo, como se planteará en la última parte de nuestro trabajo, este mismo silencio abrumador que posibilitó la subsistencia del régimen se convirtió pronto en la instancia que abrió las posibilidades de lucha y cambio en el universo del Proceso y que finalmente posibilitó la puesta en jaque del funcionamiento aparentemente impávido del régimen militar.

2 El miedo y el silencio en el universo discursivo del proceso

El régimen militar que se constituyó el 24 de Marzo de 1976 en el nombre de lo que se llamó el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) surgió como una respuesta a la percepción generalizada de “crisis y desorden” que se había diseminado rápidamente en el transcurso del año 1975, bajo el tercer gobierno Peronista (1973-1976). Como ha sido señalado por la literatura sobre el tema, el nuevo régimen de facto se convirtió entonces en la encarnación del afamado “orden” y fijó como uno de sus contenidos principales la total erradicación de la amenaza subversiva (BARROS, 2002; DE RIZ, 2000, AN-SALDI, 2006).² Este contenido fundante del nuevo proyecto de orden fue organizado y ordenado a través de la lógica de la “guerra”. Una guerra que no era concebida como una guerra limpia, con un campo de batalla definido, con métodos convencionales y con un enemigo claro y establecido. Por el contrario, ésta era caracterizada como una guerra sucia,³ una guerra que requería el uso de métodos drásticos y no tradicionales en contra de un enemigo no convencional y ambiguo cuyo objetivo último era destruir por todos los medios la forma de vida occidental y cristiana, lo cual eventualmente justificaba la extensión de la represión a terrenos ilimitados (ZAC, 1995).

Sin embargo, a pesar de la naturaleza no-convencional de esta guerra y de su carácter total, la guerra contra la subversión debía ser peleada secretamente y seguir ciertos procedimientos.⁴ Estas restricciones estaban dadas por el propio leitmotiv del régimen militar: restablecer el orden para proteger los valores occidentales y cristianos de los argentinos. Este objetivo introdujo en la realidad del Proceso la autoridad de la iglesia católica y el mundo de la ley. El régimen militar no era ni un régimen sin ley ni estaba por fuera de la esfera de influencia

² Este y otros contenidos quedaron plasmados en las principales Actas y Estatutos del gobierno en las cuales la Junta Militar enumeró los objetivos y fines del Proceso de Reorganización Nacional. Véase para este contenido, ‘Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional’ (Troncoso, 1984).

³ La expresión “guerra sucia” fue repetidamente mencionada en los discursos militares y declaraciones. Véase, entre otras, las declaraciones de General Jorge Rafael Videla, (CLARÍN 8-9-1977), las declaraciones del entonces Director del Colegio Militar, Coronel Juan Carlos Bilbao (CLARÍN 11-09-1977) y las declaraciones de General Ibérico Saint Jean, (LA OPINIÓN, 29-05-1978).

⁴ En este sentido, las ejecuciones abiertas y públicas estaban completamente descartadas, Como el General Díaz Bessone reconoció en una entrevista reciente con la periodista francesa Marie-Monique Rubin, ‘el régimen militar hizo desaparecer a 7000 personas y no los ejecutó públicamente por el temor a la condena Papal’ (PÁGINA 12, 1-09-2003).

y crítica del Vaticano ni del resto de la comunidad occidental. Estas dos dimensiones impusieron ciertas restricciones a lo que era posible en la guerra contra la subversión. Es decir, si la junta militar no quería perder su rol de guardián de los valores occidentales y cristianos, las fuerzas miliares debían llevar a cabo su “misión” de erradicar la subversión utilizando cierto *modus operandi* que no provocara la condena directa del Papa ni la idea de dispensabilidad de la ley. De esta manera, había en la realidad del Proceso una continua interacción entre la lógica de la guerra y el imperio de la ley y la moral que posibilitó la producción de un “mundo ilegal y clandestino” de centros de detención, de grupos de tareas, de torturas, de secuestros y desapariciones que se solapó e interfirió con un “mundo oficial” de sujetos jurídicos, de normas y leyes (ZAC, 1995).

Ahora bien, la frontera borrosa entre estos dos mundos - entre la guerra y la ley - funcionó como el principal mecanismo para la diseminación del miedo y la intimidación bajo el PRN. Es decir, la circulación de información extra-oficial y los rumores de la guerra, las omisiones y silencio de las autoridades, los reportes diarios sobre ejecuciones, los secuestros y los ataques violentos a plena luz del día en lugares públicos, como así también la presencia continua de las fuerzas militares y policiales en las calles indujo y produjo una percepción de amenaza, temor, desconfianza y vulnerabilidad sin precedentes en la población argentina.

Como ha sido sugerido por la literatura relevante, el miedo bajo el Proceso fue inducido para fomentar la obediencia a los objetivos y mandatos del régimen (CORRADI, WEISS FAGEN y GARRETÓN, 1992; NORDSTROM y MARTIN, 1992; KORDON et al, 1988; CORRADI, 1983; CARRADI, 1987). En este sentido, el miedo fue diseminado para producir y vigilar la identificación de la población con una serie de nuevas subjetividades inscriptas en el discurso del régimen que interpelaban “al público”, a “la familia argentina”, “al ciudadano común”, “al vecino”, a asistir al gobierno en su defensa de los valores occidentales y cristianos y a cooperar y asistir activamente en la guerra contra la subversión (IETSWAART, 1982). Uno de los tantos reportes diarios sobre la guerra anti-subversiva ilustra claramente el rol esperado del ciudadano-sujeto en el discurso militar,

El Comando de la Zona linforma al público que otra victoria ha sido ganada sobre la subversión Marxista, gracias a la espontanea y valiosa colaboración de los vecinos, quienes avisaron a las fuerzas de la ley acerca de sucesos sospechosos en una vivienda (LA OPINION, 22-04-1977).

El ciudadano que “colaboraba espontáneamente” era el único ciudadano reconocido bajo el universo discursivo del PRN y en este sentido todo comportamiento que difería de aquella actitud de colaboración era considerado como sospechoso y excluido como posiblemente subversivo. En este mismo sentido, la familia argentina - caracterizada como célula básica y fundamental de la sociedad Argentina - era advertida sobre los peligros de la subversión, y exhortada a controlar y ajustar la vida familiar a las necesidades y valores del régimen. La famosa campaña oficial difundida en diarios y televisión que interpelaba a las madres y padres acerca de “las actividades de sus hijos e hijas” es ilustrativa de estos mecanismos de intimidación a los que era sometida la familia en ese entonces para asegurar su obediencia (FILC, 1997). De esta manera entonces, el miedo definió a muchas de las acciones y actitudes de la gente en sus familias, como así también en sus lugares de trabajo, escuelas y lugares públicos (ZAC, 1995).

Ahora bien, como mencionábamos, a través del miedo el gobierno promovió la sujeción de la población a los fines y mandatos del régimen, pero muy importantemente para el éxito del PRN, por medio de este miedo e intimidación el gobierno también impulsó y difundió el silencio (MIGNONE, 1991; RIAL, 1992; NORDSTROM y MARTIN, 1992; KORDON et al, 1998, ANSALDI, 2006). La ciudadanía toda, la familia y el público en general eran llamados a obedecer las reglas del Proceso, denunciar alguna desviación y mantener un silencio absoluto. Un “tiempo para el silencio” era necesario para alcanzar y lograr el tan afamado orden. Como expresó claramente el Almirante Emilio Massera en una ocasión, “(...) hay tiempos donde algunos deben hablar y otros deben permanecer callados, así podremos escuchar a las voces de los justos y al silencio de los pecadores” (citado por FELTLOWITZ, 1998).

En un contexto donde nadie sabía muy bien quien era un “pecador”, el silencio se suponía debía ser total. Es decir, los límites borrosos de la guerra resultaron en una proliferación de enemigos y en una definición de la subversión crecientemente ambigua y laxa. De esta manera, la condición de subversivo podía aplicar a cualquier persona en cualquier lugar y eran los militares los que en última instancia podían identificar a los elementos subversivos y terminar con aquella amenaza (ZAC, 1995).

Con este contexto de fondo, un silencio generalizado, particularmente en relación a todo lo que tenía que ver con la guerra anti-

subversiva, se extendió rápidamente a través del tejido social.⁵ El silencio se convirtió en la actitud general y legítima a asumirse. Toda desviación de aquel mandato era sistemáticamente condenada y censurada no solo por las autoridades oficiales sino también por los otros ciudadanos, por los miembros de las familias, y por los amigos y compañeros de trabajo. Estrategias de auto-protección reflejadas en mecanismos de auto-censura o en expresiones de desconfianza como “no te metas” fueron frecuentemente utilizadas.⁶ Asimismo, era también habitual la puesta en marcha de mecanismos de negación e ignorancia. Con respecto a esto último, a pesar de los reportes diarios sobre ejecuciones y de la evidencia de violencia extrema, varios sectores de la población prefirieron ignorar o negar las atrocidades y los crímenes cometidos por el régimen. El lado clandestino de la represión y el ocultamiento de los crímenes claramente favoreció este tipo de actitudes y llevó a estos sectores a aceptar la versión oficial de los hechos, no encontrando razones suficientes para romper con el mandato del silencio (NOVARO y PALERMO, 2003). Es decir, apelando a la ignorancia o negando los hechos previno a estas personas de tener que tomar alguna posición y en cierta manera de quedar expuestos a posibles preguntas e indagaciones futuras. Para otros sectores en cambio, cumplir con el mandato del silencio involucró la adopción de una postura cínica y cómplice a través de la cual aceptaron y adhirieron a las acusaciones del régimen que asociaban a las víctimas de la represión con la subversión. Expresiones como “por algo habrá sido” o “algo habrán hecho” o “no es con nosotros” expresaban claramente esta aceptación. Esta actitud cínica ayudaba a estas personas a desprenderse de los peligros de la subversión y al mismo tiempo a encontrar razones validas para su silencio acerca de lo inaceptable.⁷ Testimonios como el que sigue a continuación muestran claramente esta actitud, “En ese tiempo, todo el mundo pensaba que los que se llevaban estaba relacionados o eran

⁵ Como se ha explicado, el silencio reforzó el miedo y generó varios mecanismos y configuraciones defensivas a nivel individual (KORDON et al, 1998).

⁶ Como ha sido explicado, como parte de estas estrategias de auto-protección, algunas personas escondieron o quemaron sus libros y revistas que creían los comprometían, varios abogados rechazaban tomar los casos de personas desaparecidas y se negaban a los pedidos de presentaciones de habeas corpus en contra de detenciones arbitrarias, algunos médicos se negaron a atender a los supuestos sospechosos de pertenecer a organizaciones subversivas y mucha gente evitó encontrarse y verse con los familiares de aquellas personas desaparecidas (MIGNONE, 1992; RIAL, 1992).

⁷ Numerosos testimonios de los familiares de las víctimas de la represión cuentan acerca de esta actitud cínica por parte sus vecinos o de aquellos que presenciaron las operaciones militares y los secuestros. Como el testimonio de Elsa de Becerra muestra, ‘Cuando entraron en mi casa y se llevaron a mi hija, a pesar de la violencia del ataque y de los autos y el ruido, mis vecinos actuaron como si no hubieran visto ni escuchado’ (citado por FISHER, 1989).

miembros del ERP o Montoneros [...] Yo continué con mi vida normal” (citado por NOVARO y PALERMO, 2003).

Frecuentemente, asumir como válida la asociación entre víctimas de la represión y subversivos también involucró la aceptación implícita o explícita de los métodos represivos utilizados por el régimen. Un testimonio corto muestra esto que decimos: “me quedé muy shokeada cuando vi como había quedado la casa, pero lógicamente, unos subversivos estaban viviendo allí” (citado por NOVARO y PALERMO, 2003) Es decir, el shock y la incertidumbre sobre lo sucedido quedaba inmediatamente censurado por la repetición de la lectura de los hechos ofrecida por el régimen que justificaba el uso de métodos ilegales en contra de enemigos no convencionales. De esta manera, el silencio y la falta de acción quedaban asegurados.

Como dijimos anteriormente, el silencio prevaleciente en la población sería crucial para el PRN. Es decir, aunque como mostramos detrás del silencio se condensaron diferentes actitudes y mecanismos de auto-protección, negación y cinismo que no necesariamente significaban una completa adhesión al régimen militar, este silencio no poco ambiguo le permitió a la junta militar prevenir la expresión y la articulación de versiones alternativas sobre la realidad del Proceso (ZAC, 1995). En este sentido, el silencio impidió y obstaculizó temporalmente las posibilidades de desafío y de resistencia hacia los planes y objetivos de corto plazo del régimen - la eliminación de la subversión - y de esta manera facilitó y aseguró su permanencia en el poder.

Ahora bien, el silencio generalizado que la junta militar eficientemente impulsó fue también posible gracias a la tolerancia y aceptación de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales hacia los planes y objetivos sostenidos por el régimen. Como veremos a continuación, los líderes y figuras más importantes de la iglesia argentina, de los partidos políticos, de los sindicatos y de los medios de comunicación locales se identificaron rápidamente con las nuevas condiciones impuestas por el gobierno de facto y no encontraron razones suficientes para romper con el mandato del silencio. En la mayoría de los casos, las ansias por colaborar prevendrían a estos sectores de desafiar y denunciar la campaña represiva brutal que estaba teniendo lugar en nuestro país y los dejaría dar la espalda a las miles de víctimas de la represión y familiares. Sería justamente esta actitud prevaleciente lo que ayudaría crucialmente al régimen a mantener exitosamente el silencio en la población y a evitar cualquier interrogación seria y comprometedora acerca de la guerra sucia contra la subversión.

3 El silencio asegurado

Bajo el proceso, la actividad política fue drásticamente reducida. Tan pronto como la junta militar asumió el control político del gobierno, la vida política partidaria nacional fue suspendida, varias organizaciones políticas y sociales fueron disueltas, y severas medidas fueron implementadas para aquellos que no cumplieren con las restricciones impuestas por el Proceso.⁸ Junto con estas medidas oficiales, se puso en marcha una campaña sistemática de intimidación y represión hacia las fuerzas políticas y sociales que las atravesó transversalmente. Como resultado, la mayoría de los partidos políticos y organizaciones sociales sufrieron, en diferente medida, los efectos de la represión en sus bases y cuadros medios. Militantes políticos y sociales se convirtieron en los principales blancos de los secuestros, torturas y desapariciones (CONADEP, 1984).

De esta manera, en este contexto de extrema represión podría pensarse que las fuerzas políticas quedaron totalmente atrapadas bajo el régimen represivo, con escaso espacio para actuar y condenadas al silencio. Sin embargo, como ya ha sido señalado por la literatura, se puede observar que desde sus inicios y para asegurar su continuación en el poder, la junta militar mantuvo abierto un canal de comunicación y negociación permanente con las principales figuras políticas del momento con el objetivo de establecer un “diálogo” sobre la reorganización futura de la vida política del país (NOVARO y PALERMO, 2003; YANUZZI, 1996). Así, a pesar de la suspensión oficial y de las medidas impuestas sobre los partidos y organizaciones políticas, los líderes de la mayoría de las fuerzas políticas - excluyendo aquellas que habían sido declaradas ilegales - mantuvieron sus liderazgos partidarios y continuaron con las reuniones regulares y actividades públicas. Los líderes partidarios lejos estuvieron de perder enteramente su prominencia en la realidad política del Proceso, ocupando la posición de interlocutores “válidos” para el régimen y continuando con su rol de referencias “legítimas” para los medios nacionales y opinión pública en general.⁹

Este espacio, confuso pero aun vigente, para la actividad política y los varios intercambios entre los líderes políticos y el régimen que

⁸ Véase para una descripción de estas medidas el informe *Argentina, proceso al genocidio* (COMISIÓN ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS, 1977)

⁹ Las acciones contradictorias del gobierno sin embargo, desplazaron a la actividad política a un terreno ambiguo en el cual los límites acerca de lo que era tolerado y aquello que era prohibido eran confusos. El trazo de esos límites pertenecía a las autoridades militares, quienes arbitrariamente podían ampliar o restringir el campo de lo tolerable y lo permitido.

tuvieron lugar en los primeros meses del nuevo régimen militar no persuadió a las principales fuerzas políticas a mostrar algún tipo de malestar o desacuerdo con respecto a la guerra contra la subversión.¹⁰ Las críticas o señales de descontento hacia el régimen militar por parte de estas fuerzas se dirigieron generalmente a la política económica del gobierno y a su incapacidad para controlar la inflación y promover el desarrollo económico.¹¹ Pero al igual que otros sectores de la población, los principales líderes políticos mantuvieron un profundo silencio respecto de la ilegalidad y brutalidad que la guerra anti-subversiva implicaba. Más allá del miedo a ser identificado con la subversión que existía en la población toda, la obediencia al mandato del silencio que prevaleció entre la mayoría de los principales líderes políticos fue mayormente un síntoma de convicciones comunes fuertemente establecidas en la formación política argentina. En otras palabras, había entre las fuerzas políticas una fuerte identificación con la demanda de “orden” del régimen y con su plan de poner un fin definitivo a los movimientos guerrilleros, como así también al proceso de radicalización política que se había propagado en la era post-Perón. Más aún, existía entre varias de estas fuerzas un acuerdo acerca de la legitimidad del Proceso y de la necesidad de la interrupción temporal del orden constitucional en pos de lograr el ansiado orden. Como el líder del Partido Radical de ese entonces, Ricardo Balbín, expresara, “aceptamos en principio, como una contribución a la paz y unión entre los Argentinos, la prudencial suspensión de la actividad política” (LA VOZ DEL INTERIOR, 11-11-1976, citado por TCACH, 1996).

A pesar de las sospechas y del conocimiento de las atrocidades cometidas por el régimen, las fuerzas políticas en su mayoría no intentaron “interferir” o poner “obstáculos” en los planes del régimen y su pelea contra la subversión.¹² La eliminación de la subversión era considerada un prerequisite para el restablecimiento del orden. Como quedó claro en las palabras del líder radical a fines del año 1977, “si la subversión ha sido eliminada, es necesario que el gobierno empiece a abrir el camino hacia la paz y la recuperación del país (...)” (LA PRENSA, 21-11-1977, citado por TCACH, 1996).

¹⁰ La muestra clara de esto es la casi total ausencia de declaraciones condenatorias al golpe de estado durante el primer año del gobierno de facto.

¹¹ Véase por ejemplo las declaraciones de Rogelio Frigerio (LA NACIÓN, 5-5-1978).

¹² Hubo excepciones a esta actitud generalizada. Véase por ejemplo la declaración conjunta de varios líderes políticos de la UCR en Agosto de 1977, donde se le pide al gobierno una “urgente investigación” sobre los episodios violentos que estaban teniendo lugar en el país, especialmente sobre la masacre de Pilar en la cual más de cincuenta cuerpos mutilados fueron encontrados. Asimismo se solicitaba investigación sobre los secuestros de Hipólito Solary Yrigoyen y Mario Abel Amaya, dos reconocidos líderes del partido (TRONCOSO, p. 61)

Es así como la dirigencia política dio muestras una y otra vez al gobierno de facto de su intención de colaborar y no mostró resistencias a participar en el llamado al diálogo que el régimen lanzó desde sus pasos iniciales. Como se ha señalado, este parecía el único camino posible hacia una salida del interludio militar y hacia la recuperación democrática. En este contexto, las posibilidades para que las fuerzas políticas rompieran el silencio y criticaran al gobierno por los métodos utilizados en la guerra sucia eran pocas. Hacerlo, hubiera implicado la puesta en peligro del espacio para el diálogo y la negociación sobre el futuro del país y consecuentemente una pérdida mayor de su poder, algo que no estaban dispuestos a ceder a pesar de la brutalidad e ilegalidad de la represión (NOVARO y PALERMO, 2003; TCACH, 1996; MIGNONE, 1991; YANUZZI, 1996).

Ahora bien, como explicamos anteriormente, fue el carácter ambiguo de la represión lo que permitió que la mayoría de los líderes políticos pudieran mantener su silencio y su actitud pasiva. La clandestinidad de la guerra permitió la negación e ignorancia de la persecución sistemática y la eliminación física del “enemigo”. A la vez, también facilitó la repetición de la interpretación sostenida por el régimen que caracterizaba las consecuencias de la guerra como “excesos” y “errores” cometidos por grupos fuera de control que debían ser controlados. Durante los primeros años del Proceso, la mayoría de los llamados de atención y muestras de preocupación por la represión estaban articulados en estos términos, como si los asesinatos y desapariciones fueran accidentes esporádicos que podían prevenirse, en vez de consecuencias de un plan sistemático de exterminio y represión.¹³ Nuevamente citando al líder radical en ocasión de la desaparición de dos jóvenes abogados, “el gobierno debe actuar con energía para que este tipo de episodios no se repitan” (citado por NOVARO y PALERMO, 2003).

Una actitud similar a la de la dirigencia política dominó entre los principales líderes sindicales de ese entonces. Durante los primeros meses del nuevo gobierno de facto, y a pesar del gran número de activistas gremiales y trabajadores afectados por la represión (CONADEP, 1984), no hubo de parte de los principales dirigentes sindicales llamados de atención ni críticas públicas hacia el régimen y los métodos ilegales y violencia extrema utilizada. Aquí nuevamente el miedo y la

¹³ Un punto de quiebre serían las declaraciones del líder Justicialista Deolindo Bittel en ocasión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Bittel fue entrevistado por la Comisión y presentó una declaración en nombre del Partido Justicialista en la cual denunciaba los métodos ilegales de la represión y los abusos de derechos humanos.

intimidación influyeron en parte en el silencio de los dirigentes, pero como sucedió entre las fuerzas políticas, y como ha sido señalado por la literatura existía entre la dirigencia sindical una aprobación generalizada con respecto a la campaña represiva y sus objetivos inmediatos. Es decir, la guerra sucia implicaba la eliminación de los grupos guerrilleros y al mismo tiempo la supresión de una importante facción clasista combativa dentro de las uniones sindicales. Ambos se habían convertido en una amenaza para la dirigencia sindical poniendo en jaque su autoridad dentro de los sindicatos como también dentro del Partido Peronista (NOVARO y PALERMO, 2003). En este sentido, la campaña represiva encontró poca resistencia entre los líderes sindicales y no raramente su aceptación se hizo explícita en pos del reclamado “orden”. Como muestra una declaración conjunta de los 25,

Los extremistas representados tanto por los grupos guerrilleros de izquierda, asesinos y suicidas, como los grupos de derecha que quieren imponer su propia justicia con una violencia no menos inhumana, son la expresión de una visión elitista que desprecia al pueblo... el movimiento trabajador hoy como siempre repudia la acción de los extremistas... el estado debe monopolizar el uso de la fuerza y oponerse a los extremismos de ambos signos (citado por NOVARO y PALERMO, 2003).

El silencio de los líderes sindicales como el de la dirigencia política sería valorado por la junta militar que vio en este una forma de asegurar el silencio generalizado del resto de la población y evitar algún tipo de confrontación y cuestionamiento que ponga en jaque sus planes y objetivos. Pero sería el silencio del clérigo y de la iglesia católica lo que probaría ser fundamental para el PRN y su futuro.

Como mencionamos al principio de esta exposición, el discurso del PRN estaba estructurado alrededor de la defensa de los valores occidentales y cristianos, la cual introdujo en la realidad del régimen el mundo de la ley y la moralidad, y muy importantemente, la autoridad de la iglesia católica. Entonces, la reacción del clérigo en relación a la guerra contra la subversión y sus consecuencias resultarían decisivas para el éxito o fracaso del Proceso. Una condena explícita de las atrocidades y crímenes cometidos por el estado podría haber desafiado seriamente la estabilidad del régimen y en última instancia su legitimidad de origen.

Tristemente para el destino de miles de víctimas de la represión, esto nunca sucedió. Desde un principio - a través de su activa colaboración, de declaraciones entusiastas pero fundamentalmente a través del silencio intencional - la jerarquía eclesiástica mostró a los hombres militares claras expresiones de apoyo y aceptación (OBREGÓN, 2005).

Apenas sucedido el golpe, luego de una reunión de la jerarquía eclesiástica con los hombres del nuevo gobierno de facto, Monseñor Tortolo, presidente de la Conferencia Episcopal, señaló, “aunque la Iglesia tiene una misión específica, hay circunstancias en que no puede dejar de participar, cuando estamos tratando con los problemas relacionados al orden del estado” (LA NACIÓN, 24-03-1976).

Como claramente planteó Tortolo, y como sucedió con las fuerzas políticas y sindicales, lo que impulsaría el apoyo de la iglesia al régimen militar sería el problema del orden (MIGNONE, 1999; OBREGÓN, 2005). Los años previos al golpe fueron años de alarma para importantes sectores de la iglesia católica. Como había sucedido en otras dimensiones de la sociedad argentina, el proceso de radicalización social y política que había comenzado en los años sesenta había afectado considerablemente a la iglesia. Grupos reformistas dentro de esta institución habían avanzado notoriamente y logrado alto grado de influencia sobre los niveles medios y bajos, generando divisiones y niveles de polinización sin precedentes entre los religiosos (OBREGÓN, 2005; MIGNONE, 1999). Este avance e influencia fue percibido como una amenaza para la institución católica: ideologías populistas, marxistas ponían en peligro la estabilidad y unión de la iglesia. Esta percepción generalizada gradualmente provocó que la jerarquía eclesiástica adoptase posiciones cada vez más nacionalistas y conservadoras y que se acercase de esta forma al discurso de las fuerzas armadas y sus demandas por orden, por la forma de vida de los argentinos, por los valores cristianos y occidentales etc (PALERMO y NOVARO, 2003). Sería justamente esta percepción la que finalmente subyacería detrás del apoyo o al menos de la tolerancia de la iglesia hacia la campaña represiva del Proceso. Este apoyo que como dijimos más arriba se materializó en algunas ocasiones en activa participación, fue acompañado por omisiones intencionales y por un silencio generalizado acerca de todo lo referido a la guerra contra la subversión. Solo unos pocos se atrevieron a romper el silencio, pero estas interrupciones no fueron más que consecuencias de acciones privadas e individuales que

no reflejaban la posición oficial y dominante de la iglesia católica (OBREGON, 2005; MIGNONE, 1999).¹⁴

Como dijimos anteriormente el silencio de la iglesia católica resulto fundamental para la subsistencia del régimen y la concreción de su campaña represiva. El silencio de la iglesia sin embargo, como así también el de los partidos políticos y de los sindicatos, solo fue posible gracias al ocultamiento y clandestinidad de la guerra contra la subversión que como mencionamos mas arriba permitió la negación de los hechos o una pretendida ignorancia de los mismos. Ahora bien, una importante condición para que esto sucediera fue el silencio generalizado de los medios de comunicación locales que como ha sido señalado no solo resultó de la puesta en funcionamiento de mecanismos de censura y auto-censura sobre los diarios, radios y canales de televisión sino que también respondió a la rápida adaptación de la mayoría de ellos a las nuevas condiciones impuestas por el régimen militar. De esta forma, a poco tiempo de instaurado el PRN, los medios se habían transformado en un espacio homogéneo, poco critico y deferente hacia el régimen militar que facilito enormemente el control de la información respecto a todos lo relacionado con la guerra contra la subversión (NOVARO y PALERMO, 2003; KRUDSON, 1997).

Entonces, como vimos en este apartado, la complicidad y cierta intención de colaboración con el régimen estuvieron detrás del cumplimiento y la obediencia del mandato de silencio por parte de importantes sectores sociales y políticos. A pesar de la represión brutal e ilegal y las obvias diferencias y reservas que varios de estos debían tener con el régimen respecto de la guerra sucia, estos sectores estuvieron preparados para aceptar y apoyar al PRN y sus planes restauradores. Ahora bien, mas allá de las razones particulares que yacían detrás de la posición de cooperación de los diferentes grupos, esta actitud generalizada solo puede ser entendida en un contexto político de un escepticismo creciente hacia la democracia liberal, sus instituciones y valores que se había diseminado fuertemente en la Argentina de los años sesenta y setenta. Durante aquellos años, los derechos individuales, las libertades y la misma democracia como sistema de gobierno eran más y mas concebidos como elementos puramente formales que raramente podían ofrecer arreglos validos y soluciones reales para los problemas del pueblo (CHERESKY, 1992; PANIZZA, 1995, 2005). En el momento del golpe de estado de Marzo de 1976, la percepción de “desorden” y “crisis” que el propio discurso militar había contribuido a producir y

¹⁴ Jaime de Nevares, Miguel Hesayne, Jorge Novak and Enrique Angelleli. Este ultimo asesinado por las fuerzas militares en Agosto de 1976.

diseminar, profundizó este escepticismo político creciente y preparó el terreno para una amplia aceptación del interludio militar y sus planes re-fundacionales (BARROS, 2008). La intervención militar fue recibida con cierto alivio por los principales miembros de la Iglesia católica, por varios partidos políticos, por los sindicatos y por otros varios sectores sociales. En este sentido, la intervención fue recibida con la convicción común que para lograr y asegurar el “orden” un cierto grado de violencia y represión debía ser aceptado y apoyado. Este tipo de percepciones y convicciones se vieron prontamente reflejados en la vasta mayoría de la población y permitió así un extenso apoyo hacia el régimen militar. Aunque bajo el Proceso los niveles de violencia fueron mucho más altos de lo esperado y evidencia de esto era frecuentemente observada y presenciada por la mayoría de la población, la identificación con la demanda de orden y todo lo que esto implicaba silenció a aquellos que estaban en la posición de expresar su voz de descontento. Figuras políticas, dirigentes sindicales, los hombres de la Iglesia y personalidades influyentes de los medios y de la cultura y las artes prefirieron dar la espalda a la guerra sucia contra el terrorismo y permitieron al régimen cubrir con un espeso manto de silencio los horrores de esa guerra. El desafío al discurso del régimen militar, la interrupción de su aparente coherencia, vendría de las inesperadas voces de los sin voz, de los no-parte: de las víctimas de la represión estatal y de sus familiares.

3 La experiencia del silencio y la falta

La guerra contra la subversión prontamente comenzó a dejar severas huellas en la sociedad Argentina. Apenas transcurrido el golpe, vastos sectores de la población fueron afectados directamente o indirectamente por la intensidad y magnitud de la represión sin precedentes. Miles de secuestros y desapariciones golpearon a innumerables familias, grupos de amigos, círculos de colegas y trabajadores, grupos de militancia política etc (CONADEP, 1984).

Como muestran los múltiples relatos de los testigos, el miedo y la incertidumbre que los secuestros produjeron se vieron intensificados por los enigmas que rodearon las operaciones militares. En la mayoría de los casos, la identidad de los secuestradores no se revelaba, tampoco las razones por las detenciones y no se daba a conocer donde eran llevados ni hasta cuando.¹⁵

¹⁵ Este punto ha sido enfatizado por la mayoría de las personas que presenciaron los operativos. Véase, por ejemplo, los testimonios de los familiares durante el juicio a las juntas militares

De esta manera, los secuestros sumergieron a los familiares de las víctimas y a las personas conectadas a esas familias en un clima de profunda confusión y gran ansiedad. Una serie de preguntas irresueltas, tales como, ¿quienes eran los responsables de los secuestros? ¿cuales eran las razones de las detenciones? ¿donde debían buscar a sus seres queridos? fueron introducidas bruscamente en sus vidas cotidianas.

Fue así como inmediatamente después de los secuestros, la reacción inicial de estos familiares fue buscar las respuestas en aquellos que estaban en posición de brindar información: las autoridades militares y policiales. Como es bien sabido, siguiendo el mandato de silencio, la respuesta generalizada de las fuerzas de seguridad fue la negación total de información. Las fuerzas del orden negaron cualquier tipo de relación e involucramiento con los operativos y los secuestros, y pretendieron ignorar todo lo relacionado con los ataques. Además de esta negación absoluta de información, los familiares eran sometidos largas horas de espera, intimidación de todo tipo y amenazas. Frecuentemente no se tomaban sus declaraciones y denuncias y eran enviados una y otra vez de una a otra unidad policial.¹⁶

Después de semanas y meses de idas y vueltas, la vasta mayoría de los familiares no obtuvo ningún tipo de información confiable de parte de las autoridades policiales y militares. Comenzaron así un círculo de búsqueda sin fin que se extendió de las unidades policiales y barracas militares a hospitales, clínicas psiquiátricas, prisiones (FISHER, 1989, 1992; BOUSQUET, 1982; MELIBOVSKY, 1997; GUZMAN BOUVARD, 1994; NAVARRO, 1989; OWEN STEINER, 2003; GORINI, 2006). La mayoría de ellos repetidamente también apeló a la justicia y presentó pedidos de habeas corpus, en su gran mayoría con resultado negativo. La respuesta que recibían de los tribunales era siempre la misma: la persona en cuestión no se encuentra detenida y no hay conocimiento de su arresto o detención por parte de las autoridades competentes (CONADEP, 1984). Los jueces no fueron capaces de localizar o rescatar una sola persona secuestrada a pesar de las muchas evidencias respecto de la identidad de los secuestradores y de la vasta información disponible que apuntaba a las fuerzas de seguri-

(EL DIARIO DEL JUICIO, 1985) También véase los testimonios registrados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP, 1984)

¹⁶ Innumerables testimonios relatan estos sucesos, véase por ejemplo los testimonios recopilados por la literatura sobre el tema (FISHER, 1989, 1992; BOUSQUET, 1982; MELIBOVSKY, 1997; GUZMAN BOUVARD, 1994; NAVARRO, 1989; OWEN STEINER, 2003; GORINI, 2006) y en los recopilados durante el trabajo de la CONADEP y durante el juicio a las juntas militares (CONADEP, 1984; EL DIARIO DEL JUICIO, 1985).

dad.¹⁷ La junta militar había alcanzado con éxito el control del poder judicial e importantemente había logrado la lealtad de la mayoría de los jueces a los objetivos del Proceso y a su mandato de silencio.

Como parte del circuito de búsqueda, los familiares también acudieron a los hombres de la iglesia (FISHER, 1989, 1992; MELIBOVSKY, 1997; GUZMAN BOUVARD, 1994). Apelando a una de las institucionales más tradicionales del país e identificando el rol crucial que ésta ocupaba dentro del discurso del régimen, varias familias creyeron recibirían información y ayuda por parte de los sacerdotes (MIGNONE, 1999). Como ha sido ya señalado, en la mayoría de los casos las respuestas del clérigo no fueron las que las familias esperaban. Como explicamos mas arriba, en la Iglesia Católica prevaleció una actitud homogénea de no interferir en la guerra sucia contra la subversión y de obedecer al mandato de silencio. Es así como muchos sacerdotes ni siquiera recibieron a los familiares de las victimas, o en el caso que lo hicieron, - forzados por la presencia continua y numerosa de las familiares en las iglesias - negaron tener conocimiento de la situación y se excusaron acerca de su incapacidad para interceder. Otros, mas sensibles a la desesperación de los familiares intentaron intervenir como favor personal ante las autoridades militares. Pero nunca preparados para sumir una actitud publica de confrontación con el régimen militar, estos intentos o favores personales resultaron en un nuevo fracaso para muchos de los familiares. Después de varios encuentros y entrevistas con los representantes de la iglesia, los familiares estaban igualmente o quizás más desesperados y confundidos que antes (MIGNONE, 1999). Un testimonio de un familiar revela el tipo de respuesta ambivalente que muchos de ellos recibieron por parte de los hombres de la iglesia,

La gente me decía que vaya a ver a Monseñor Graselli (...) tuve que hacer cola ya que había mucha gente que quería verlo... cuando logré verlo me dijo, con tono cansado, “estos chicos...que problemas nos traen, a veces toman el camino equivocado (...)” (citado por FISHER, 1989).

De esta manera, los familiares utilizaron todos los recursos simbólicos disponibles y exploraron todos los canales y procedimientos institucionales oficiales y extra-oficiales en búsqueda de informa-

¹⁷ Esto se revela en los numerosos testimonios de familiares de las victimas recolectados por la CONNAD que relataron sus pedidos a la justicia y las respuestas negativas que recibían de parte de los jueces. (CONADEP, 1984)

ción sobre sus seres queridos. Individualmente contactaron y mantuvieron reuniones y entrevistas con miembros del gobierno, con militares y policías de alto rango, con figuras políticas y dirigentes sindicales, con personas influyentes de la cultura y de los medios. Excepto en muy pocas ocasiones, la mayoría de estas reuniones, entrevistas y contactos personales tuvieron resultados negativos: nada podía hacerse y no existía información disponible y fehaciente del destino de las víctimas. Como mostramos anteriormente, un silencio profundo cubría los actos de la guerra y nadie parecía capaz o dispuesto a quebrantarlo.¹⁸

El silencio, las omisiones, la falta de respuestas y los rechazos venían acompañadas frecuentemente de un mensaje - implícito o explícito - que sugería a los familiares que las detenciones de sus seres queridos “habrían sido por algo” “por haber tomado el mal camino”, o “porque requerían rehabilitación”. Identificado con la visión del régimen, este mensaje repetía la asociación entre víctimas de la represión y subversión, profundizando el sentido de culpa y frustración de las familias, quienes de acuerdo al discurso del régimen eran en última instancia las responsables de la conducta de sus miembros (KORDON y EDELMAN, 1988). Es decir, si las familias y particularmente los padres no fueron capaces de proteger a sus hijos e hijas de la subversión, estas eran “malas familias”, “malos padres”. En una sociedad dominada por el miedo y la inseguridad, esta correlación entre las familias de las víctimas y la subversión resultó en la marginalización de aquellos afectados por la represión. Como muestra uno de los tantos testimonios al respecto, una madre relata “cuando se enteraban que se habían llevado a tu hijo, te preguntaban en qué andaba (...) la gente se distanciaba (...) la mayoría de la gente evitaba hablarnos” (testimonio de Elsa de Becerra, citado por FISHER, 1989).

De esta forma, los familiares de las víctimas fueron arrojados a una búsqueda y espera solitaria que muchas veces se profundizaría por los propios miedos, culpa y vergüenza. Es decir, las familias de las víctimas estaban inevitablemente interpeladas y afectadas por esa asociación entre víctimas y subversión, así como también por el miedo y

¹⁸ Aquí es importante señalar nuevamente que hubo excepciones y que algunas de estas figuras y líderes efectivamente intentaron ayudar a los familiares de las víctimas, como por ejemplo fue el caso del Dr Raul Alfonsín de la UCR, o el caso de Roberto Cox, director del diario Herald. Pero también es importante señalar que como los numerosos testimonios muestran, estas fueron excepciones que de ninguna manera fueron suficientes para interrumpir el silencio uniforme que prevaleció en la sociedad toda o para calmar la frustración y ansiedad de los miles de familiares en la búsqueda de sus seres queridos (FISHER, 1989, 1992; MELIBOVSKY, 1997; GUZMAN BOUVARD, 1994).

la incertidumbre reinante en la realidad del proceso. Es así como avergonzadas de hablar y contar sobre la desaparición y secuestro de sus seres queridos con otros, temiendo una condena social, y en mayor grado, temerosos de lo que podría sucederle a las víctimas o a ellos mismos, muchas familias se sumergieron en una tarea aislada y privada de búsqueda de sus seres queridos.¹⁹ Detrás de este inicial aislamiento también yacía la esperanza que el secuestro de sus seres queridos había sido el resultado de un error, que ni bien se rectificara, sus hijos serían liberados y volverían a casa (GUZMAN BOUVARD, 1994). Es decir asumiendo la interpretación del régimen, es decir, “solo los subversivos eran llevados”, estas familias esperaban que se probase la inocencia de sus hijos y su búsqueda se remontaba a encontrarlos y probar esa inocencia.

Durante el curso de su búsqueda sin embargo, estas esperanzas y presuposiciones comenzaron a desvanecerse y un sentido de desesperanza y desesperación creció gradualmente entre los familiares. La falta de respuestas respecto al destino de sus seres queridos estaba llevando a esas familias a una situación que eran incapaces de entender y aprehender. Después de persistentemente apelar a todos los recursos disponibles bajo la realidad del PRN, la detención, el secuestro y la desaparición de sus familiares no podía ser simbolizada ni explicada. Es decir, todas las referencias simbólicas estaban fracasando en darle sentido a esta nueva experiencia que estaban atravesando y una frustración creciente estaba apresando sus vidas. Como revela uno de los tantos testimonios,

Es muy difícil explicar como te sentís cuando te sacan a un hijo y no sabes que le pasó a ese hijo, Es como un vacío terrible, como si te hubieran arrancado algo de adentro tuyo y no hay nada que puedas hacer. Nadie nos ayudó (Testimonio de María del Rosario, citado por FISHER, 1993).

Como el testimonio muestra, estas familias experimentaron junto con la ausencia de sus familiares, la falta o ausencia de sentido. Esta falta o ausencia era el efecto de lo que podríamos caracterizar como una situación de dislocación. Esto es, una situación que presupone una falla estructural en el orden simbólico existente (LACLAU, 1993). En otras palabras, el discurso militar y los otros discursos disponibles bajo el PRN fracasaron en representar y limitar el alcance de

¹⁹ Como consecuencia del miedo, muchas familias esperaron años antes de denunciar la desaparición de un familiar, también se cree que muchas nunca lo hicieron (CONADEP, 1984).

los nuevos eventos provocados por la represión ilegal y este fracaso estaba mostrando sus efectos desestructurantes en numerosas familias y grupos de la sociedad que estaban afectados por el secuestro de uno o varios de sus miembros.

Por el lado del discurso militar, su fracaso era el resultado de una de las condiciones principales de su existencia: defender y proteger los valores occidentales y cristianos de la amenaza subversiva. Esta condición, como dijimos ya, introdujo en el discurso del régimen ciertos límites a lo que era posible, decible y concebible bajo el PRN. Es decir, el reconocimiento de las miles de detenciones arbitrarias ilegales y de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad estaba claramente mas allá de esos límites.

Por el lado del resto de las fuerzas políticas y sociales, su incapacidad para simbolizar los efectos de la guerra estaba estrechamente vinculada a su identificación con la demanda de orden del Proceso. La inscripción de estos efectos hubiera implicado un reconocimiento público de la represión ilegal lanzada por el régimen, y junto con este reconocimiento una decisión inevitable, decisión que como vimos las fuerzas sociales y políticas no estaban dispuestas a tomar si pretendían preservar su posición influyente dentro del proceso.

Entonces, el silencio y el consecuente fracaso de los discursos disponibles para articular los efectos de la guerra sucia produjeron una suspensión temporal de sentido dentro de la realidad del PRN que sumergió a los familiares de las víctimas y a todos aquellos afectados por la represión en un estado de profunda desesperación y frustración. Arrojadlos así a una búsqueda sin fin, estas familias se encontraron destrozadas y eran incapaces - a pesar de todos sus intentos - de darle sentido a la experiencia que estaban viviendo.

Pero fue justamente esta suspensión de sentido lo que forzaría a estas personas a salir de su búsqueda solitaria y a intentar articular los efectos de la guerra sucia, de tal forma que esta rearticulación les provea de un nuevo principio de lectura que de sentido a su experiencia compartida de ausencia y falta. La dislocación de un orden particular genera la necesidad de re-articular y re-instituir el espacio interrumpido. Cada respuesta a una dislocación intenta entonces proveer una nueva lectura que otorgue sentido a la experiencia de dislocación y cambio y en última instancia imponga un nuevo sentido social de manera estable (LACLAU 1993). Este intento por parte de los familiares involucró un prolongado proceso de participación e involucramiento en prácticas y luchas políticas colectivas que dio inicio a un

nuevo movimiento social alrededor de la lucha por los derechos humanos sin precedentes en el país.²⁰ Este nuevo movimiento y el lenguaje de derechos humanos que le dio forma sostuvo tempranamente una interpretación y descripción de la realidad del régimen militar muy distinta a la mantenida por el gobierno y apoyada por los sectores políticos y sociales dominantes. Esta interpretación suponía una realidad ‘profundamente alterada por la dramática situación de miles de desapariciones y detenciones prolongadas’ que eran explícitamente asociadas a ‘motivaciones políticas’ (FDDRP, Julio 1978). Es decir, las desapariciones y detenciones prolongadas no eran caracterizadas como cualquier tipo de delito aislado, sino más bien como crímenes que estaban condenados internacionalmente y caratulados como violaciones a los derechos humanos. Entonces, las desapariciones y detenciones y la constante amenaza al estado de derecho y a la seguridad jurídica eran crucialmente articulados a actos represivos de carácter político y asociados de este modo a violaciones sistemáticas de derechos humanos. De esta manera la problemática de los derechos humanos aparecía en la lectura y diagnóstico producida por los familiares como - en palabras textuales - ‘el principal problema del país’ y el ‘mayor obstáculo’ para su futuro desarrollo (FDDRP, Julio 1978).

A través de este proceso articulador alrededor de los derechos humanos y en un intento de dominar el sentido de lo social, los familiares respondieron, representaron y al mismo tiempo dieron sentido a los efectos dislocatorios de la guerra sucia contra el terrorismo rompiendo así con el mandato de silencio y abriendo las posibilidades de lucha y resistencia en el universo simbólico del PRN.

Para finalizar podemos concluir que paradójicamente fue entonces este mismo silencio que inicialmente facilitó la permanencia del régimen militar inaugurado en Marzo de 1976 lo que se convirtió en la instancia que finalmente posibilitó la puesta en jaque de la guerra anti-subversiva y sus consecuencias y desafió eventualmente el funcionamiento aparentemente impávido del PRN.

4 Conclusiones

En este trabajo abordamos el tema del silencio bajo la última dictadura militar. Como se mostró, el silencio que se propagó rápidamente en la sociedad argentina durante los primeros años del régimen

²⁰ Para un análisis detallado del proceso de surgimiento y constitución de esta movilización sin precedentes véase Barros, 2008.

de facto fue crucial para el sostenimiento del mismo. Es decir, si bien detrás de aquel se condensaron diferentes reacciones y actitudes que no implicaron una adherencia total al discurso del Proceso, ni tampoco una completa identificación con las posiciones de sujeto que éste habilitaba, si le permitió al gobierno militar en sus inicios controlar y prevenir la expresión y articulación de construcciones alternativas de la realidad. Este silencio, como vimos fue reasegurado no solo por las acciones del gobierno, sino por la identificación de las principales fuerzas políticas y sociales con los objetivos del Proceso. Sin embargo, como se explicó, este silencio reinante y el resultante fracaso de los discursos disponibles para articular los efectos de la represión sin precedentes resultaron en una suspensión temporal de sentido dentro de la realidad discursiva del régimen que eventualmente abrió las posibilidades de lucha y resistencia en el universo simbólico del PRN. El silencio y la falta se convirtieron entonces en la instancia que finalmente suscitara la movilización y constitución de un nuevo movimiento y lenguaje de derechos humanos en el país que pondría en jaque al régimen militar y su guerra anti-subversiva.

Referencias

BARROS, Sebastián. **Orden, democracia y estabilidad**. Discurso y Política en la Argentina entre 1978 y 1991. Córdoba: Alción Editora, 2002.

BARROS, Mercedes. **The emergence and constitution of the human rights movement and discourse in Argentina**. Colchester/United Kingdom: University of Essex, 2008.

BOUSQUET, Pierre. **Las locas de Plaza de Mayo**. Buenos Aires: El Cid Editor, 1982.

COMISIÓN ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS. **Argentina, proceso al genocidio**, Madrid: E. Querejeta, 1977.

CORRADI, Juan. The mode of destruction: Terror in Argentina. **Telos**, n^o 54, 1982-1983.

_____. The culture of fear in civil society. En: CORRADI, Juan E.; PERALTA RAMOS, Mónica; WAISMAN, Carlos (Eds). **From military rule to liberal democracy in Argentina**. Boulder: Westview Press, 1987.

DE RIZ, Liliana. **La política en suspenso (1966/1976)**: Historia Argentina 8. Buenos Aires: Paidós, 2000.

Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (FDDRP). **Solicitada**, Julio, 1978.

FEITLOWITZ, Marguerite. **A lexicon of terror: Argentina and the legacies of torture.** New York: Oxford University Press, 1998.

FILC, Judith. **Entre el parentesco y la política.** Familia y dictadura (1976-1983). Buenos Aires: Editorial Biblos, 1997.

FISHER, Jo. **Mothers of disappeared.** Boston: South End Press, 1989.

_____. **Out of the shadows: women, resistance and politics in South America.** London: Latin America Bureau, 1993.

GORINI, Ulises. **La rebelión de las madres.** Buenos Aires: Editorial Norma, 2006.

GUZMAN BOUVARD, Marguerite. **Revolutionizing motherhood: the mothers of the Plaza de Mayo.** Wilmington: Scholarly Resources, 1994.

KORDON, Diana R. et al. **Psychological effects of political repression.** Buenos Aires: Sudamericana/Planeta Publishing, 1988.

KORDON, Diana; EDELMAN, Lucila. Psychological effects of political repression I. In: KORDON, Diana R. et al. **Psychological effects of political repression.** Buenos Aires: Sudamericana/Planeta Publishing, 1988.

KNUDSON, Jerry W. **Veil of silence: the Argentine press and the dirty war (1976-1983).** *Latin American Perspectives*, v. 24, n.º 6, 1997, p. 93-112.

LACLAU, Ernesto. **Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo.** Buenos Aires: Nueva Visión, 1993.

MELIBOVSKY, Matilde. **Circle of love over death: mothers of the Plaza de Mayo.** Willimantic: Curbstone Press, 1997.

MIGNONE, Emilio. **Iglesia y dictadura.** Buenos Aires: Editorial La Página. S.A., 1999.

MIGNONE, Emilio. **Derechos Humanos y sociedad: el caso argentino.** Buenos Aires: CELS, 1991.

NORDSTROM, Carolyn; MARTIN, Jo Ann, (Eds.). **The paths to domination, resistance and terror.** Los Angeles and Oxford: University of California Press, 1992.

NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. **La dictadura militar 1976-1983: del golpe de Estado a la restauración democrática (Historia Argentina 9).** Buenos Aires: Paidós, 2003.

OBREGON, Martín. **Entre la cruz y la espada: la iglesia católica durante los primeros años del "proceso".** Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2005.

TRONCOSO, Oscar. **El proceso de reorganización nacional/1.** Cronología y documentos (de marzo de 1976 a marzo de 1977). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1984.

TCACH, César. Radicalismo y dictadura (1976-1983). En: QUIROGA, Hugo; TCACH, Cesar (Eds). **A veinte años del golpe**. Con memoria democrática. Buenos Aires: Homo Sapiens Editores, 1996.

YANUZZI, María de los Ángeles. **Política y dictadura: los partidos políticos y el “proceso de reorganización nacional” (1976-1982)**. Rosario: Fundación Ross, 1996.

ZAC, Lillian. **The narratives of order: the discourse of the Argentinean military regime (1976-1983)**. Colchester/United Kingdom: University of Essex, PhD thesis, 1995.

Mercedes María Barros
E-mail: mercedesbarros@gmail.com

Artigo recebido em agosto/2009.
Aprovado em dezembro/2009.